

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE SOBERANÍA: TRIBUNALES COMPETENTES EN EL LITIGIO DEL CASO COSTA RICA-NICARAGUA

Los conflictos geopolíticos, en especial los relacionados con las fronteras nacionales, siempre resultan controversiales y complejos, en tanto los Estados nacionales buscan la defensa de sus fronteras. Tal protección se relaciona con los valores más arraigados de la soberanía nacional y, por eso, una negociación siempre remite a relaciones históricas en las que las dinámicas del poder fluctúan de forma impredecible.

La soberanía es el discurso que sostiene la legitimidad de la protección fronteriza; sin embargo, son múltiples las disputas por aspectos geopolíticos que obligan a los Gobiernos a actuar de manera contundente con las herramientas que ofrece el derecho internacional para dirimir conflictos de naturaleza fronteriza y evitar la amenaza latente de enfrentamientos bélicos. En palabras de Carl Schmitt (2009), el enemigo externo pone en riesgo los intereses de un Estado, lo que propicia la disposición al enfrentamiento cuando no se cuenta con mecanismos de solución de conflictos.

Desde la segunda mitad del siglo XX, el respeto hacia la comunidad internacional y sus tratados internacionales ha puesto límites a la radicalización de los conflictos entre Naciones, por medio de tribunales como la Corte Internacional de Justicia, principal órgano de las Naciones Unidas encargado de dirimir tales asuntos y evitar desenlaces bélicos.

A la Corte Internacional de Justicia pueden recurrir todos los miembros de las Naciones Unidas. Su jurisdicción se extiende a todos los litigios que los Estados sometan y a todos los asuntos previstos en la Carta de las Naciones Unidas o en tratados y convenciones vigentes. Así las cosas, esta es la instancia judicial que debe decidir conforme al derecho internacional las controversias jurídicas entre Estados y puede emitir opiniones consultivas sometidas por órganos o instituciones especializadas de la ONU²⁴.

El Artículo 38 del Estatuto de la Corte aplica las convenciones internacionales que establecen reglas reconocidas por los Estados litigantes, la costumbre internacional como prueba de una práctica general aceptada como ley y las decisiones judiciales y la doctrina de los autores más calificados de varios países, como medio subsidiario para la determinación de las reglas jurídicas²⁵.

Contexto del litigio entre Costa Rica y Nicaragua

Entre estos dos países centroamericanos ha existido un conflicto histórico por definir los límites del río San Juan, originado desde la misma Independencia. Se ha manejado por medio de tratados limítrofes, los cuales han sido objeto de controversia en varias ocasiones, por lo que el caso se llevó de nuevo a organismos internacionales.

La disputa por el río San Juan tiene como ingrediente adicional la gran riqueza de la región por sus amplias zonas boscosas y biodiversidad. Sumado a lo anterior:

El valor histórico deriva de su posición geoestratégica, la cual hizo del río San Juan el centro de atención de las grandes potencias durante por lo menos tres siglos, ya que es visto como una de las mejores rutas naturales transoceánicas en América (Quesada, 2014, p. 70).

24 De acuerdo con el Artículo 34 1, "Sólo los Estados podrán ser partes en casos ante la Corte". El Artículo 35 sostiene: "1. La Corte estará abierta a los Estados parte en este Estatuto". El Artículo 36.1 dispone: "La competencia de la Corte se extiende a todos los litigios que las partes le sometan y a todos los asuntos especialmente previstos en la Carta de las Naciones Unidas o en los tratados y convenciones vigentes".

25 La Corte Internacional de Justicia puede dirimir las controversias de orden jurídico que versen sobre: a) la interpretación de un tratado; b) cualquier cuestión de derecho internacional; c) la existencia de todo hecho que, si fuera establecido, constituiría violación de una obligación internacional, y d) la naturaleza o extensión de la reparación que ha de hacerse por el quebrantamiento de una obligación internacional. La competencia de la Corte se extiende a todos los litigios que las partes le sometan y a todos los asuntos previstos en la Carta de las Naciones Unidas o en los tratados y las convenciones vigentes.

La controversia está sustentada en una perspectiva de seguridad y soberanía, por cuenta de la desconfianza mutua respecto a los fines e intereses de la apropiación de los límites, ya sea por el tráfico en el área o por el acceso a recursos (López, 2012).

La disputa ante tribunales internacionales

Ambos países pueden acudir ante la Corte Internacional de Justicia, al ser miembros de las Naciones Unidas.

En efecto, Costa Rica puede presentar una denuncia contra Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia y fundamentar su solicitud en una grave violación a la soberanía, pues la ocupación y el uso por parte del Ejército de Nicaragua del territorio de Costa Rica se entienden como una incursión. Ello supone la probable vulneración de los tratados obligacionales de Nicaragua hacia Costa Rica. Puede formular, además, una solicitud de medidas provisionales como la salida de todas las tropas de Nicaragua, la terminación de la construcción de un canal a través de Costa Rica y el cese inmediato del vertido de sedimentos en el territorio de Costa Rica y de otras acciones atentatorias contra los recursos naturales del área.

La demanda que adelante Costa Rica estaría encaminada a recobrar la soberanía, garantizar la defensa del territorio y la protección de los recursos naturales. Sin duda, en virtud del Artículo 36 de su Estatuto, la Corte Internacional de Justicia puede asumir la competencia en este caso, por tratarse de asuntos previstos en la Carta de las Naciones Unidas.

Otro argumento que puede referir Costa Rica en su demanda es la necesidad de que el máximo Tribunal se pronuncie sobre el conflicto para prevenir y luchar contra fenómenos que afectan a los Estados, como el narcotráfico, el tráfico de armas y otras manifestaciones del crimen en la frontera. Lo anterior, si Costa Rica estima como causa para alegar ante la Corte la presencia ilegítima del ejército nicaragüense en su territorio y su vinculación con hechos asociados con la delincuencia organizada.

Nicaragua, por su parte, puede presentar demanda de forma paralela ante la Corte Internacional de Justicia, con fundamento en que el Tribunal posibilite al país el aprovechamiento del caudal de las aguas del río San Juan, por considerar que el dragado es un derecho absoluto de Nicaragua y, por tanto, debe continuar

gozando de las atribuciones para hacerlo navegable y mantenerlo en condiciones óptimas. Asimismo, puede alegar que la presencia de tropas en zona fronteriza obedece a acciones legales, en el marco de competencias nacionales para combatir flagelos como el tráfico de drogas y armas. La defensa que ponga en marcha Nicaragua respecto a sus atribuciones en ese río y sus límites se puede basar en el Tratado de límites Cañas-Jerez (1858), sus instrumentos Laudo Cleveland y Laudo Alexander y en la decisión de la Corte Internacional de Justicia de 2009.

En el referido pronunciamiento, la Corte manifestó que Nicaragua tenía atribuciones sobre el río; por ello, se podría argüir que el país goza del derecho a hacer el dragado para recuperar su caudal histórico, lo cual redundaría en el beneficio de ambas Naciones. Acerca del conflicto de navegación entre Nicaragua y Costa Rica por el río San Juan, la Corte Internacional de Justicia (2009) confirmó el dominio de Managua sobre el importante caudal que desemboca en el Caribe. En la actualidad, la controversia se suscita por una extensión de tierra de unos 151 kilómetros cuadrados en el sector de la isla Calero.

Las acciones legales que adelanten los Estados ante la Corte Internacional de Justicia se encaminan a que el Tribunal se exprese en el marco de sus competencias en torno a la demarcación territorial con un amojonamiento y a la legalidad de la presencia de miembros del Ejército nicaragüense en la zona fronteriza. Esto supone un pronunciamiento sobre el territorio que ambos países reclaman como propio y que en parte ha sido ocupado por miembros de tal Ejército²⁶.

Las controversias relacionadas con la titularidad de la soberanía entre ambos países se particularizan en las acciones de dragado del río San Juan, sobre el que Nicaragua tiene soberanía conforme a un fallo del Tribunal de La Haya de julio de 2009 y Costa Rica tiene derechos a perpetuidad de libre navegación con fines de comercio, al amparo del Tratado Cañas-Jerez, de 1858.

26 La Corte Internacional de Justicia solo asume la competencia para conocer los casos cuando existen tres circunstancias: las partes llegan de común acuerdo y solicitan su intervención, que no es este el caso; los dos países han aceptado la competencia previamente por declaraciones unilaterales y por aplicación de un tratado.

Procedimiento ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: inadmisibile para la confrontación entre el Estado de Nicaragua y Costa Rica

El 6 de febrero de 2006 se presentó el Estado de Nicaragua por medio de petición interestatal ante el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, debido a un supuesto incumplimiento del Estado de Costa Rica de su deber de brindar protección de los derechos humanos a la población migrante nicaragüense bajo su jurisdicción (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2007a).

En especial, buscaba la salvaguarda de los derechos humanos con garantías judiciales, igualdad ante la ley y protección judicial en perjuicio de las siguientes víctimas: Natividad Canda Mairena, destrozado por dos perros Rottweiler el día 10 de noviembre de 2005; José Ariel Urbina Silva, asesinado en La Guácima de Alajuela, Costa Rica, el 4 de diciembre de 2005; José Antonio Martínez Urbina, herido de gravedad en el episodio en el que fue asesinado Urbina Silva, hospitalizado en la Sala de Cirugía de Varones del Hospital México, San José, Costa Rica; Francisco Angulo García, herido de gravedad en el mismo episodio en el que fue asesinado Urbina Silva hospitalizado en la Sala de Cirugía de Varones del Hospital de Alajuela; Rito Antonio Obando, herido a pedradas en el mismo episodio en el que fue asesinado Urbina Silva y Elder Angulo García, herido a pedradas en el mismo episodio en el que fue asesinado Urbina Silva, además de la población migrante nicaragüense en Costa Rica, en situación de vulnerabilidad.

Sin embargo, este caso no llegó más allá de un informe de inadmisibilidad de la Comisión Interamericana, porque no cumplió con el requisito del previo agotamiento de los mecanismos internos, aun cuando el Estado de Nicaragua alegó las excepciones a dicha regla previstas en el Artículo 46.2 de la Convención americana. Una de ellas, la imposibilidad de agotar los recursos internos por parte de las víctimas, debido al estado de indigencia en el que se encontraban, hecho que no logró demostrar, pues no aportó prueba alguna que permitiera a la Comisión determinar que esta excepción podía ser aplicada. También se desestimó el presunto retardo injustificado, por cuanto la Comisión halló que se habían adelantado investigaciones en relación con cuatro de las víctimas e incluso se identificaron los presuntos responsables de los hechos; por ende, al no existir prueba que amerite el retardo en los procesos judiciales, los recursos hasta ese momento activados son adecuados y efectivos para proteger la situación jurídica infringida.

La Comisión también determinó que no se evidenció la supuesta práctica sistemática de violaciones a los derechos humanos de los migrantes en Costa Rica, aunque advirtió que, de ser ciertas las alegaciones, los individuos sujetos a dicho patrón de transgresiones tendrían muy pocos o ningún medio interno para defenderse, lo que los convertiría en sujetos de especial protección.

Declarar responsabilidad internacional de un Estado parte de la Convención, por haber ejecutado o tolerado en su territorio una práctica sistemática de discriminación, implicaría para la Comisión una valoración de la prueba contundente que tenga en cuenta este extremo y que cree la convicción de la verdad de los hechos alegados.

Procedimiento ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene como competencia central mantener la paz y seguridad entre las Naciones. Para materializarla, puede tomar decisiones mediante resoluciones para obligar a los miembros, de acuerdo con lo estipulado por la Carta de las Naciones Unidas. En este sentido, el Consejo de Seguridad puede intervenir si el conflicto entre los dos países persiste y atenta o pone en peligro la paz o la seguridad de los Estados.

Esta función emana del Artículo 24 de la misma Carta, el cual dispone: “Los Estados miembros de las Naciones Unidas confieren al Consejo de Seguridad la responsabilidad primordial de mantener la paz mundial y la seguridad internacional”. Así las cosas, si el Consejo llega a conocer de este caso, la Corte Internacional de Justicia perdería la competencia.

En diciembre de 2015, la Corte Internacional de Justicia (2015) emitió un fallo en el que se expresó a favor de la soberanía de Costa Rica sobre el territorio en disputa; además, señaló la violación de la soberanía de ese país por parte de Nicaragua, mediante la presencia del Ejército en la zona limítrofe y la excavación de tres caños, por lo que obligó a Nicaragua a pagar una compensación por los daños causados.